

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ACEÑOLAZA

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de patentes de invención y de modelos de utilidad

La discusión del régimen de patentes de invención y modelos de utilidad me permite realizar algunas consideraciones que estimo servirán para apuntalar conceptualmente el texto de la ley.

La sanción de la ley 111 en 1874 constituyó un importante avance en la legislación nacional. Hasta entonces nuestro país no había reglado mecanismos que protegieran la capacidad inventiva de sus ciudadanos ni de aquellas industrias que se radicaban en territorio argentino.

Recordemos que la llamada "revolución industrial" se produjo en Europa como resultado de una tecnificación cada vez mayor de los procesos industriales. La ciencia

y la tecnología comenzaron a desarrollarse en el marco de un proceso de globalización de la economía que hasta entonces no había sido visto. Los grandes imperios militares apoyaron su economía en la inventiva personal para llevar adelante, con mayor eficiencia, sus procesos de dominación. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos necesitaron consolidar su presencia internacional importando materias primas y exportando productos manufacturados. Dicho como hoy suele expresarse, hubieron de exportar inteligencia.

Inteligencia es lograr que un producto primario se transforme tantas veces como sea necesario para cubrir las demandas de un mercado. Para ello está la imaginación y el espíritu creador del hombre. Este investiga, hace ciencia y produce el desarrollo tecnológico. Detrás de este proceso hay un tiempo dedicado y una

inversión en laboratorios o modelos que le permiten arribar a lo que busca.

Y este proceso y este tiempo valen dinero. Sólo quien alguna vez ha hecho ciencia o ha desarrollado modelos tecnológicos sabe de los sinsabores y de los problemas que suelen presentarse cuando se indaga con metodología. Y todo esto, como ya lo dije, vale dinero. Pertenecía éste al individuo, al grupo de investigación, a una institución privada o al Estado. Siempre hay un costo que debo ser reconocido y, naturalmente, debidamente protegido.

Para ello la legislación nacional y la internacional instituyeron las patentes para proteger la labor creativa. Y esto es lo que venimos a discutir en este momento.

Quiero hacer notar que la ley 111 dio la respuesta que necesitaba la sociedad argentina por algo más de una centuria. Nunca dejamos de proteger y de buscar los medios para que la investigación creadora tenga la entidad que nuestra patria requería.

En esto creo necesario recordar que han sido diferentes las etapas en las que el Estado nacional se comprometió para que la investigación científica progresara. Pero debo enfatizar que ha sido este gobierno el que más se ha abocado a resolver esta cuestión sobre la que el Congreso aún tiene deudas.

Hace ya cuatro años se debatió y aprobó la llamada Ley de Transferencia Tecnológica, de la que fuera autor el actual ministro de Educación, ingeniero Jorge Rodríguez. Ella permitió federalizar el sistema tecnológico y le proveyó fondos para producir la interacción científico-tecnológica estatal-privada. Esta ley está en marcha y ha dado excelentes resultados a pesar de que el sector privado no se ha comprometido adecuadamente.

Suelo afirmarse, especialmente de boca de quienes poco conocen y mucho hablan, que la inversión en ciencia y técnica es insuficiente. Generalmente se lo plantea como una crítica al gobierno, crítica simplista y con más color político de oposición que una verdadera evaluación de un sistema cuya organicidad aún no podemos estructurar.

Estas personas suelen decir que el monto que la Argentina asigna a ciencia y tecnología es ridículo comparado con países desarrollados como Estados Unidos, Japón o Francia. En parte es cierto y en parte es mentira, lo que nos permite decir que es una verdad con mentiras o también una mentira con algunas verdades. El presupuesto del Estado nacional, como lo saben los señores diputados, ronda los 39.000 millones de pesos. El presupuesto de diferentes organismos vinculados a ciencia y tecnología (Conicet, INTI, INTA, INIDEP, CNEA, sectores de salud, economía y fuerzas armadas, etcétera) ronda los 600 millones; mientras que en las universidades nacionales donde naturalmente se desarrolla investigación científica, la cifra es del orden de los 1.400 millones. Si sumamos estos valores la cifra ronda los 2.000 millones, que en realidad significa el 5 % del presupuesto nacional.

Podrá decirse que es una cifra inflada en cuanto en las universidades, el objetivo también es educativo,

pero nadie podrá negar que hoy por hoy la investigación científica es una de las principales actividades de todas ellas.

Cuando se habla de la inversión en ciencia y tecnología de los países desarrollados, muy poco se dice que la relación inversión estatal/privada es casi equivalente. Dicho de otra manera, y en términos idénticos, la inversión privada en ciencia y tecnología en la Argentina debería rondar los 2.000 millones. Y todos sabemos que ello no es así. Sabemos que la inversión privada en ciencia y tecnología es insignificante. La hacen algunas fundaciones, ONG, universidades privadas y, en menor escala, industrias.

Lamentablemente, nuestra realidad es que el sector privado no invierte en ciencia y tecnología en la Argentina. Si el Estado y el sector privado invirtieran como corresponde en ciencia y tecnología, el monto estaría cerca del 2 % del PBI.

De hecho esta ley de patentes de invención viene a dar sustento a nuestro ámbito científico-tecnológico. Estamos próximos a sancionar la ley de educación superior, que prevé que cada universidad pueda desarrollar su sector "comercializador" de servicios, como asimismo tenemos en avance la ley del sistema de ciencia y tecnología. Todas éstas bien pueden servir, junto a la de patentes, para consolidar un sector tan importante como es el que nos ocupa.

La ley en debate, en el artículo 4º, define la invención como "toda creación humana que permita transformar la materia o energía para su aprovechamiento por el hombre". También destaca que la novedad de una invención se encuentra en el hecho de que ésta no esté comprendida en el estado de la técnica, interpretándose ésta como el conjunto de conocimientos hechos públicos antes del registro de la patente. Todo esto sirve para certificar la originalidad del proceso creativo humano, que puede ser pasible de patentamiento.

En los artículos 6º y 7º se señala lo que no es considerado invención para la ley y también que no es patentable. En este último tema debe destacarse que no es patentable la "totalidad del material genético y biológico existente en la naturaleza o su réplica en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana". Este tema fue objeto de debate cuando hemos tratado la adhesión argentina al convenio internacional sobre la biodiversidad. Adhesión que implica sentar bases de protección efectiva sobre potenciales patentamientos de productos naturales de nuestra patria, en lo que incluye el genoma humano.

Al referirse al derecho del inventor creo que se da una amplia cobertura de posibilidades y el tiempo necesario para que éste y sus derechohabientes gocen de los privilegios que les concede la ley. El premio a la inventiva queda debidamente protegido.

La creación del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual constituye un hecho importante producido por la ley. Es el organismo que habrá de regular el mecanismo mediante el cual se registrarán los inventos, asimismo como el ente administrativo que aplicará la presente ley.

Mucho se habló sobre el artículo 42, especialmente el cuestionamiento que sobre él han hecho personeros de intereses extranjeros. Creo que su esencia radica en sostener la decisión soberana del Estado argentino de establecer exigencias de radicación para poder participar del mercado nacional. Asimismo, establece el mecanismo de reciprocidad que permite que las invenciones argentinas puedan de igual manera asentarse en diferentes países que integran el sistema económico internacional.

En ese sentido merece destacarse que nuestra legislación se ajusta a las normas que sobre derechos de propiedad intelectual aprobó el GATT en su reunión de Marruecos de 1994. Este, como se sabe, reconoce que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados y como tal deben ser considerados en el marco

del derecho internacional. Estos permitieron la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), estrechamente relacionada con la Organización Mundial del Comercio.

Debó destacar que el proyecto de ley no sólo se ajusta en lo referido a las patentes sino también en todo lo atinente a los modelos de invención. La adhesión al Acuerdo del GATT fue aprobada por la Honorable Cámara en diciembre de 1994. Hoy es ley en la Argentina y entendemos que, al dar sanción a esta ley, no sólo venimos a cumplir con los intereses nacionales sino que dejamos en salvaguarda todo lo que en este sentido regía el derecho internacional.

Por todo ello dejo sentado mi voto afirmativo al presente proyecto de ley.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO PAROLA

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de patente de invención y de modelos de utilidad

Esto es tal vez el más trascendente de los temas que hemos tratado este año en el Parlamento, ya que estamos discutiendo una modificación sustancial de las reglas de juego actualmente vigentes en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial, que afectarán tanto a una parte importante de la industria argentina como a los consumidores de sus productos.

No es un secreto que han existido fuertes presiones diplomáticas sobre el Parlamento durante el tratamiento en comisión de los distintos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, por representantes del partido de gobierno y de los partidos de la oposición. En algún caso que no es necesario nombrar, y en especial en algunos momentos, estas presiones excedieron claramente el límite impuesto por el decoro diplomático y hasta por el buen gusto, entrando en el terreno de la amenaza y la falta de respeto a la soberanía del país. Como autor de uno de esos proyectos, y como integrante de una de las comisiones donde se analizó el tema, quiero reivindicar la conducta de mis colegas, que al ignorar estas presiones, demostraron su absoluta independencia de criterio para hacer primar los intereses del país por sobre los intereses particulares. El dictamen que tenemos en tratamiento merece destacarse porque no sólo refleja esa voluntad sino que es, adicionalmente, un testimonio de la posibilidad de llegar a acuerdos legislativos entre los partidos, que continúa la tradición de otras leyes trascendentes en cuya redacción también participó, como fueron la ley de defensa del consumidor y la defensa de la competencia.

La ley 111 fue en su momento una de las más avanzadas del mundo y formó parte de un conjunto de instrumentos legales que, al sentar las bases de la organización institucional argentina, permitieron la modernización del país e impulsaron el desarrollo de su economía. El mismo plazo transcurrido desde su sanción hace necesaria una revisión de su contenido, ya que es bien sabido que en las últimas décadas, se ha producido una verdadera revolución tecnológica que se reflejó en las

legislaciones nacionales mediante la adopción de nuevos institutos, que dieron una mayor flexibilidad a los regímenes de protección y los adaptaron al hecho de que en el mundo actual ya no es el inventor independiente y solitario el que predomina sino, por el contrario, el equipo de investigación, por lo común ligado a empresas que cuentan con los urgentes recursos que se requieren para elaborar proyectos de investigación y desarrollo.

A esta necesidad de actualización se agregó también la necesidad de incorporar a nuestra legislación el trabajo acuerdo a que se arribó en la Ronda Uruguay del GATT, ya que esto implica continuar con la inserción del país en el sistema de garantías recíprocas sobre la propiedad industrial, que comenzó con la adhesión al Convenio de París.

Como es sabido, este Acuerdo GATT fue el resultado de una larga negociación en la que tanto los países en desarrollo como los desarrollados sacrificaron parte de sus posiciones originales, como es usual en toda negociación, sobre todo entre países soberanos. Alcanzado finalmente el acuerdo, éste tiene ya el carácter de un compromiso asumido por el país al que debemos atendernos escrupulosamente para ser considerados miembros confiables de la comunidad de naciones, este reconocimiento de obligaciones ha primado en todo el tratamiento del proyecto y las presiones para obtener del Parlamento argentino lo que no se pudo obtener en el GATT sirvieron para acentuar esta adhesión a las normas finalmente acordadas. Las diferencias particulares que estamos planteando como bloque se refieren precisamente a la aceptación hasta las últimas consecuencias de esta adhesión a la normativa del GATT.

No obstante, debo decir que del mismo modo que se hizo necesario revisar la legislación para adaptarla a las nuevas circunstancias internacionales, es igualmente necesario que ello se haga teniendo muy en cuenta la importancia que ha adquirido la innovación tecnológica como determinante de la capacidad competitiva de las naciones. Es por ello que, al plantear la reforma al régimen actual, hemos aprovechado el mar-

gen de libertad que otorga el GATT para construir una ley que posibilite una más plena inserción en el mundo y la preservación de mercados domésticos competitivos. Se trató, en suma, de diseñar un instrumento legal que permita la existencia en nuestro país de un capitalismo competitivo y basado en la innovación.

Este punto no es en absoluto retórico porque la institución de la patente implica la creación de un monopolio legal, dado que otorga el derecho de prohibir a terceros su uso. Por ello, el objetivo de la ley ha sido alcanzar un delicado equilibrio entre el reconocimiento de este derecho al inventor, que significa en esencia otorgar garantías de un retorno sobre la utilización comercial de las invenciones, para que exista así un incentivo eficiente para invertir en investigación y desarrollo, con el paralelo derecho de la sociedad a preservar el bienestar de los consumidores. Se trata, en suma de que el monopolio no sea el precio que tenga que pagar la sociedad por el progreso tecnológico.

Por esa razón, el punto central que está implícito en la ley es que se acepta el derecho de propiedad intelectual, pero no el abuso de ese derecho, que es el monopolio legal irrestricto. Las limitaciones al ejercicio de ese derecho que se establecen en el proyecto de ley tienen como base el reconocimiento de que en esencia una patente otorga el derecho a cobrar una regalía sobre las invenciones, protege contra la copia pero no da un derecho a obrar como monopolista.

Es sabido que el precio en un mercado monopolístico es superior al precio en un mercado donde hay competencia. Por escasa que sea esa competencia, siempre en ese mercado habrá precios más bajos que en un mercado sin competencia. Esto se explica, como lo ha demostrado la teoría económica desde muy antiguo, porque en un mercado monopolístico siempre hay una cesión de renta de los consumidores al monopolista, que le permite obtener beneficios superiores a los que existen en mercados competitivos. En un mercado abierto, sin barreras a la entrada, este beneficio extraordinario atraería a nuevos productores, produciendo una disipación progresiva de las rentas hasta un punto en el cual será indiferente invertir en ese mercado o en cualquier otro. Es por esto que, para que un monopolio se mantenga, es necesario que existan barreras de hecho o de derecho a la entrada de inversores. Y ejemplos de las primeras, las barreras de hecho, son, entre otras, la carencia de conocimientos tecnológicos, mientras que el ejemplo clásico de las barreras legales son las patentes irrestrictas. Es por esto que el tema es tan delicado.

El reconocimiento de este punto fue lo que motivó la sanción de leyes de defensa de la competencia en todo el mundo, y la reforma de la legislación argentina este año con el objeto de hacerla más efectiva. No sería el caso de que ahora, al sancionar una ley de patentes, volviéramos sobre nuestros propios pasos creando un instrumento jurídico que cree condiciones para la existencia de barreras de hecho o de derecho que amparen monopolios.

El instrumento propuesto en el proyecto bajo consideración para evitar estas situaciones son las licencias

sin autorización de su titular como se las denominó en el Acuerdo del GATT, que establecen una limitación al ejercicio del derecho conferido por la patente. El proyecto contiene una cuidadosa definición de las condiciones que darán lugar al otorgamiento de este tipo de licencias para que no sean un derecho no ejercible ni den lugar a abusos; y contiene adicionalmente garantías suficientes de apelación ante la Justicia para quienes se sientan damnificados. No me voy a referir en detalle a ellas en homenaje a la brevedad. Sólo diré que esta normativa está en un todo de acuerdo al GATT.

El segundo punto, de singular importancia que cabe destacar del proyecto, es que la importancia no es considerada explotación de la patente. No he de extenderme demasiado sobre este punto, por ello diría que, si se aceptara lo contrario, la patente se convertiría en un instrumento de desindustrialización que desnaturalizaría su propia justificación legal, que es evitar la fabricación de un producto por parte de terceros no autorizados; en buen romance, la copia. Si llegáramos hasta el extremo de considerar la importación como explotación, sencillamente estaríamos extendiendo el monopolio legal también a las exportaciones, cuando la intención, expresada en la aceptación de importaciones paralelas, es precisamente la contraria, es decir, mantener también en materia de importaciones el mayor grado de competencia posible, como corresponde a una economía abierta integrada al mundo.

Finalmente, está el tema del plazo necesario para que nuestra industria farmacéutica se adapte al nuevo marco institucional. Sobre esto tenemos una disidencia en la interpretación de las normas del GATT con la mayoría, que se centra en la interpretación del plazo a que autoriza la normativa del acuerdo. No obstante, lo destacable es que hay un acuerdo sobre la importancia de permitir a la industria existente el reacomodamiento gradual a la nueva situación, que implicará la utilización, en medida mayor que en la actualidad, de licencias del exterior. En este nuevo marco legal los laboratorios nacionales tendrán a su favor, la posibilidad de hacer valer en las negociaciones la posesión de marcas acreditadas en la profesión médica, la existencia de una importante capacidad de venta y promoción de los productos y la de ofrecer a los licenciados una capacidad industrial en la que pueden elaborarse los medicamentos con estrictos controles de calidad.

Todo esto, que testimonia la capacidad de alcanzar acuerdos legislativos en las materias que son fundamentales para la organización económica del país, requiere, sin embargo, que el Poder Ejecutivo sepa respetarlos, demostrando una capacidad para resistir presiones diplomáticas similar a la que demostró poseer el Congreso Nacional. Tan desembizadas han sido estas presiones en los últimos días, siguiendo la peor tradición de hacerlas públicas por medio de la prensa que, de ceder el Poder Ejecutivo a ellas y vetar artículos de la ley, pondría en evidencia cuál es el papel que se le ha autoasignado en las famosas relaciones carnales.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VARELA CID

I

Disposiciones claves de un régimen de patentes sólido (A), del Tratado GATT-ADPIC (B)
y del proyecto de ley aprobado o por el Senado Nacional (C)

	CAEME REGIMEN DE PATENTES SOLIDO (A)	GATT-ADPIC (B) TRIPS	CILFA SANCION DEL SENADO (C)
Explotación	La explotación es cualquier forma neta de introducir el producto patentado en el mercado local. Se admite la importación.	Los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país. (Artículo 27, 1.)	Se excluye la importación como forma de explotación. Se admiten excepciones económicas, técnicas y relativas a la competencia. (Artículo 42.)
Importaciones sin autorización del titular de la patente	No permitidas.	El titular puede impedir que terceros importen el producto patentado. (Artículos 28, 1). Pero el agotamiento de los derechos (importaciones paralelas) está explícitamente excluido de ADPIC. (Artículo 6.)	Permitidas sin restricciones. Redacción ambigua. Artículo 36, c: "El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: cualquier persona que adquiriera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado... una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país".
Fecha de implementación	Inmediata.	Para países en desarrollo, un período de transición de hasta 10 años. (Artículo 65.)	Desde el 11/2003. (Artículo 104.)
Licencias compulsivas (en general)	Prohibidas. Excepciones: emergencia nacional, o abuso de los derechos patentarios declarado judicialmente.	Permitidas "en función de sus circunstancias propias" y bajo una serie de requisitos. (Artículo 31.)	Amplias y discrecionales facultades al nuevo Instituto de la Propiedad Industrial (INPI). (Capítulo VIII.)
Licencias compulsivas por fracaso de negociación previa	No es una razón para otorgar licencias compulsivas.	Es un requisito del otorgamiento de licencias compulsivas, pero no una causal de dicho otorgamiento. (Artículo 31, b.)	INPI puede otorgar licencias compulsivas después de 150 días de negociaciones voluntarias que no hayan surtido efecto (Artículo 45.)
Licencias compulsivas por prácticas anticompetitivas	Permitidas extraordinariamente para infracciones a la legislación antimonopolística, comprobadas judicialmente.	Permitidas. (Artículo 31, k.)	Obligatorias. (Artículo 47.) Las prácticas anticompetitivas incluyen precios excesivos, especialmente cuando hay ofertas de abastecer el mercado a precios menores y obstrucción de actividades comerciales o industriales.

	CAEME REGIMEN DE PATENTES SOLIDO (A)	GATT-ADPIC (B) TRIPS	CILFA SANCION DEL SENADO (C)
Licencias compulsivas transicionales para medicamentos	Caen bajo la prohibición general.	No están previstas. Se establecen derechos exclusivos de comercialización por 5 años para las solicitudes de patentes presentadas durante el período de transición. (Artículo 70, 9.)	Licencias compulsivas automáticas hasta el vencimiento del término para las patentes cuyas solicitudes fueron presentadas en el período de transición (1/1/95 al 31/12/2002). (Artículo 105.)
Regalías en el caso de licencias compulsivas	De acuerdo con el valor económico de la patente.	Según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización. (Artículo 31, h.)	Teniendo en cuenta la tasa de regalías promedio del sector en cuestión. (Artículo 46, 4º párrafo.)
Licencias compulsivas por falta de explotación	Permitidas con algunas excepciones.	Permitidas en algunas circunstancias propias y con el requisito de negociaciones voluntarias previas. (Artículo 31, b.)	Permitidas después de 3-4 años, excepto razones de fuerza mayor, que incluyen razones técnico-legales, pero no financieras. (Artículo 46.)
Excepciones a los derechos conferidos	No se prevén.	Permitidas para proteger la salud pública. (Artículos 30, 8 y 1.)	Específicas para casos de productos nuevos que ofrezcan avances significativos para proteger la salud. (Artículo 44.)
Caducidad por falta de explotación	Prohibida.	Sólo admitida después de 2 años del otorgamiento de una licencia compulsiva cuando ella no logró remediar la falta de explotación. (Convenio de París.) (Artículos 5, A, 3.)	Automática después de 8-9 años, y también cuando no hubo solicitud de licencia compulsiva en 180 días después del término de 3-4 años fijado para efectuar la explotación. (Artículo 65, h y f.)
Productos en desarrollo ("Pipeline")	Revalidación de patentes cuando los productos no han sido introducidos en el mercado local.	No previsto.	Sólo para patentes extranjeras cuyas primeras solicitudes fueron presentadas dentro de un período de 2 años antes de la fecha de sanción de la nueva ley. (Artículo 106.)
Inversión de la carga de la prueba	Obligatoria.	Obligatoria luego del 1/1/2000. (Artículos 34 y 65, 4º párrafo.)	Facultad de los jueces después del 1/1/2000. (Artículo 91.)
Medidas judiciales	Eficaces.	Eficaces. (Artículo 50.)	Insuficientes. (Artículo 50.)

II

Observaciones del señor diputado respecto del proyecto de ley sobre régimen de patentes de invención y de modelos de utilidad

Buenos Aires, 27 de marzo de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo por vuestro intermedio a los miembros de la Cámara de Diputados, a los efectos de formular observaciones y disidencias parciales al proyecto de ley en revisión de régimen de patentes y modelos de utilidad, que fuera aprobado por el Honorable Senado de la Nación en fecha 16 de noviembre de 1994 (123-S-94), y cuenta con dictamen de las comisiones de Industria, Comercio, Acción Social y Salud Pública, Presupuesto y Hacienda, y Ciencia y Tecnología de esta Cámara contenidas en el Orden del Día N° 1.266.

En tiempos en que nuestra sociedad emprendía el gran cambio estructural, presenté un proyecto de ley de patentes de invención y modelos de utilidad (expediente 1.713-D-89), que abrió un extenso debate sobre el tema. En aquellos momentos sostuve que dicha ley era necesaria no sólo por razones éticas o por sus ventajas para la economía, la ciencia y la salud de los argentinos, sino también porque se debía insertar a nuestro país en el mundo. En este momento lo sigo sosteniendo, pero encuentro que la media sanción que el Senado le otorgó al proyecto y el dictamen de la mayoría, pueden llevarnos a un aislamiento internacional y pérdida de credibilidad ya que se viola un pacto internacional que fuera ratificado por este Congreso y según reza la Constitución Nacional tiene jerarquía superior a la ley.

Por ende planteo en general las siguientes observaciones:

GATT-ADPIC

1. El establecimiento de un régimen de patentes es de suma importancia que para el desarrollo económico y social de la Nación, mientras que la nueva norma que pretende la mayoría no cumple fielmente lo acordado en el acta final en que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, en especial lo estatuido por el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que se encuentra ratificado por ley 24.125, y los compromisos asumidos en los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones en vigencia.

Posibilidad de veto

2. De legislar en forma violatoria a los compromisos internacionales se actuará en forma contradictoria, que a la larga postergará la posibilidad de alcanzar ciertos

objetivos nacionales. No es posible que este Parlamento sancione leyes para superar ciertos inconvenientes de tipo económico para alcanzar una ayuda financiera externa, y a la vez, se pretenda no cumplir con lo acordado internacionalmente. Ante ello, dejo planteada la posibilidad que el Poder Ejecutivo nacional utilice la herramienta constitucional del veto.

Desarrollo económico y seguridad jurídica

3. De sancionarse la iniciativa mayoritaria no se podrán aprovechar los antecedentes y experiencia del país para reforzar sus posibilidades de desarrollo tecnológico, ofrecer empleo y dar oportunidades a sus investigadores, inventores, tecnólogos y profesionales, ya que lo que se requiere en primer lugar es garantizar la seguridad jurídica de que las normas serán cumplidas y los derechos respetados.

Promoción de la investigación

4. Dicha propuesta no constituye un instrumento para promover efectivamente los emprendimientos de investigación y desarrollo que en forma total o parcial se podrían realizar en nuestro país, ya que no cuenta con ningún artículo en este sentido.

Asimismo, formulo en particular mi disidencia respecto de algunos artículos, los que solicito se modifiquen de la siguiente manera:

Procedimientos como actividad inventiva

—Reemplazar los incisos e) y g) del artículo 6° por los siguientes:

Artículo 6°: No se considerarán invenciones a los efectos de la presente ley:

e) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales, pero sí los productos y procedimientos para su obtención, que se utilicen para aplicar estos métodos cuando reúnan los requisitos del artículo cuarto;

g) Los seres humanos.

No patentabilidad

—Reemplazar el artículo 7° por el siguiente:

Artículo 7°: No son patentables:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por la legislación;

b) Las especies y razas animales y las especies y variedades vegetales, y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción. Esta excepción no es aplicable a los microorganismos ni a los procedimientos microbiológicos o no biológicos, ni tampoco a los

productos de la biotecnología o de la ingeniería genética. Las obtenciones vegetales se regirán por la ley 20.247.

Venta o importación del procedimiento patentado

—Reemplazar el inciso b) del artículo 8º, por el siguiente:

b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta o venta o importación de estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

Importaciones paralelas

—Reemplazar el artículo 36, por el siguiente:

Artículo 36: El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica, puramente experimentales, de ensayo o enseñanza, y para ello elabore o utilice un producto o proceso igual al patentado;

b) Cualquier persona que adquiera, comercialice, transfiera, importe o utilice un producto cubierto por patente u obtenido por el proceso patentado, una vez que este producto haya sido puesto lícitamente en el comercio de la República Argentina por el titular de la patente o con su autorización;

c) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la República Argentina, si son empleados exclusivamente por las necesidades de los mismos.

—Reemplazar el artículo 37 por el siguiente:

Artículo 37: El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que, quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente hubiesen venido explotando en el país la invención cubierta por la patente, puedan continuar con dicha explotación.

Licencias compulsivas por falta de explotación

—Reemplazar el artículo 46 por el siguiente:

Artículo 46: Transcurridos tres (3) años desde la concesión de la patente o cuatro (4) años desde la presentación de la solicitud de la patente, el que expire más tarde, si la invención no ha sido explotada en los términos del artículo 43, salvo causas debidamente justificadas, o no se hayan realizado preparativos efectivos y serios para explotar la patente, o cuando la explotación de ésta haya sido interrumpida durante más de un (1) año sin causa justificada, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la invención sin consentimiento del titular.

El potencial usuario debe intentar en primer lugar, antes de recurrir al instituto, obtener la autorización del titular de la patente en términos y condiciones comer-

ciales razonables. Transcurrido un lapso de 180 días corridos, contados desde la fecha en que se solicitó fehacientemente la licencia voluntaria sin resultado, podrá peticionar al Instituto Nacional de Propiedad Industrial para que se le otorgue una licencia sin autorización del titular de la patente.

Se considerará como causa justificada, además de la fuerza mayor, entre otras, las dificultades de carácter técnico o legales, los tiempos que insumen los trabajos de desarrollo del invento, el cumplimiento de las exigencias para obtener de los registros de los organismos públicos la autorización de comercialización del producto o proceso objeto de la patente, las demoras en otorgar estas autorizaciones y demás circunstancias propias del caso. El instituto podrá otorgar plazos para el cumplimiento de las obligaciones al titular antes de decidir sobre el otorgamiento de la licencia a terceros.

Medidas judiciales eficaces

—Reemplazar el artículo 50 por el siguiente:

Artículo 50: La licencia de uso de los derechos conferidos por la patente sin autorización del titular, se sujetará a los siguientes requisitos:

a) El alcance y duración de esos usos se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados;

b) Esos usos serán de carácter no exclusivo;

c) No podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;

d) El titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

e) Se limitarán principalmente al abastecimiento del mercado interno.

La autorización de estos usos podrá darse por finalizada si el licenciataria incurriera en incumplimiento de una o más de sus obligaciones.

También podrán ser retiradas, aun antes del plazo por la que fueron otorgados, si las circunstancias que dieron origen a la autorización han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir, teniendo en cuenta los intereses legítimos del autorizado.

Las decisiones de la autoridad de aplicación serán tomadas previa audiencia de partes y producidas las pruebas, dentro del plazo de treinta días hábiles de ordenadas. Las decisiones se tomarán dentro de los noventa días hábiles de la solicitud.

—Reemplazar el artículo 60 por el siguiente:

Artículo 60: Las patentes y certificados de modelos de utilidad serán nulos total o parcialmente cuando así se resuelva judicialmente.

Inversión de la carga de la prueba

—Reemplazar el artículo 91 por el siguiente:

Artículo 91: A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular,

cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, se considera que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) Si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) Si existiese una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer, mediante esfuerzos razonables, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

Promoción y desarrollo de inversiones

—Agregar al artículo 95 los siguientes incisos:

k) Promocionar la actividad de invención y desarrollo, proponer y ejecutar medidas conducentes a tal fin, tales como desgravaciones impositivas, fondos de garantía, líneas de crédito, aplicación de regímenes vigentes en otros sectores, participación en ferias y exposiciones, programas de cooperación con universidades, asociaciones gubernamentales y no gubernamentales del sector privado tanto nacional como del extranjero;

l) Asegurarse que las actividades de investigación, invención y desarrollo, reciben apoyo de todos los organismos para su concreción, transferencia y difusión;

m) Eximir total o parcialmente a los titulares que tengan un número de patentes pequeño, del pago de las tasas, aranceles y anualidades; y brindarles apoyo para la comercialización de sus patentes;

n) Practicar visitas e inspecciones, a pedido de los interesados o de oficio, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, para prevenir o evitar que se produzcan infracciones a los derechos de propiedad intelectual o para constatarlas, pudiendo decidir, en casos de urgencia y para salvaguardar el interés público cualquiera de las medidas previas indicadas en el artículo 86, poniendo en conocimiento de lo ordenado a la justicia y a los titulares de los derechos, en los plazos previstos por el artículo 89.

Licencias compulsivas transicionales para medicamentos

—Reemplazar el artículo 105 por el siguiente:

Artículo 105: Al presentarse una solicitud de patente farmacéutica en el país, se concederá al solicitante de la patente derechos exclusivos de comercialización durante un período de cinco (5) años desde la aprobación de su comercialización o hasta que se le conceda o rechace una patente de producto en el país si ello sucediera en un período más breve, siempre que se le haya concedido una patente para ese producto en otro país miembro de la Organización Mundial de Comercio al momento de otorgarse la autorización de comercialización que regula la ley 16.463.

Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor consideración.

Eduardo Varela Cid.

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BECERRA (N. E.)

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de patentes de invención y de modelos de utilidad

El proyecto de ley de patentes que viene sancionado por el Senado es, sin lugar a dudas, una de las iniciativas de mayor relevancia entre las que ha tratado este Congreso de la Nación en los últimos años y que, como bien expresara el señor miembro informante, el estado actual del tema es producto de cinco años de estudios, debates y discusiones en las comisiones de esta Cámara, en otros foros públicos y privados, en el ámbito científico y académico; debates cuyas conclusiones, publicadas y difundidas, han enriquecido sensiblemente el texto proyectado.

Con la sanción de este proyecto, esta Honorable Cámara cumplirá dos objetivos fundamentales. El primero, que tiene que ver con la naturaleza constitucional del Parlamento, consiste en mantener vigente una de las funciones primordiales de éste, que es la modernización de la legislación de fondo. El segundo, de indudable importancia política, es el de adecuar la legislación vigente a los múltiples cambios y transformaciones que han experimentado el país y el mundo

en los últimos años. Como ya se ha expresado, estamos reformando, modernizando, una ley con 130 años de vigencia, que obró con demostrada eficacia durante muchas décadas, pero que hoy necesita adecuación a las nuevas realidades.

El tratamiento de este tema tuvo diversos avatares de carácter político, en especial por su estrechísima vinculación con el problema del patentamiento de medicamentos. Los entretelones políticos trascendieron nuestras fronteras y adquirieron relevancia internacional, vinculándose con importantísimas cuestiones relativas al comercio internacional.

Esta importancia política trajo aparejadas, como todos sabemos, presiones de distinta naturaleza. Sin embargo, este Parlamento puede estar orgulloso porque no se ha cedido a las presiones, ni en el Congreso ni en otros ámbitos del gobierno. Por el contrario, se ha obtenido un proyecto que, a nuestro juicio, logra el mayor y más adecuado equilibrio posible entre los intereses públicos y privados, nacionales e internacionales implicados.

Se ha manejado este tema de forma tal que ha quedado construido un importante consenso entre los distintos sectores interesados, demostrándose que este

Parlamento está en condiciones de ejercer la función tal vez más primordial del Estado, que es la de armonizador y encauzador de los intereses particulares que se expresan en la sociedad.

Entiendo que se ha logrado un proyecto que hoy, sin perjuicio de su perfectibilidad, contempla adecuadamente los valores sociales de mayor relevancia, como son: 1) la defensa y preservación de la salud pública, mediante la inclusión de mecanismos que impiden razonablemente el ejercicio abusivo de los titulares de las patentes; 2) asegurar la producción y abastecimiento de productos farmacéuticos impidiendo exclusividades absolutas y monopolios, y 3) controlar eficazmente los posibles efectos negativos del patentamiento respecto del precio de los medicamentos.

Debo destacarse también, como se ha hecho repetidamente por el señor miembro informante, que la redacción final del proyecto concuerda en lo fundamental con las recomendaciones, normas y acuerdos que surgen del Acuerdo final de la Ronda Uruguay del GATT y con los lineamientos generales aprobados por la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

En lo que respecta a la Comisión de Comercio de esta Honorable Cámara, la preocupación fundamental ha sido desalentar todo ejercicio abusivo de la patente, asegurar la producción nacional y el debido abastecimiento de los productos patentados y desalentar los eventuales efectos negativos sobre la estabilidad de los precios de los medicamentos.

Varios son los mecanismos que materializan el cumplimiento de dichos objetivos.

Citaremos en primer lugar lo propuesto en el artículo 36 del proyecto, en el sentido de preservar la libertad de comercio, permitiéndose, con el carácter de limitación al derecho del titular de la patente, que cualquier persona adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado cuando haya sido lícitamente puesto en el comercio de cualquier país. Esta propuesta del proyecto es de suma importancia ya que posibilita una obra adecuada del producto, lo cual significa no sólo preservación de la posibilidad de abastecimiento sino también de la estabilidad del precio.

También el régimen de licencias voluntarias y no voluntarias, previsto en los capítulos V y VIII del título II, asegura el cumplimiento de los objetivos señalados. Entre las licencias no voluntarias u obligatorias cabe destacar la que desalienta la negativa arbitraria de otorgar una licencia solicitada en condiciones comerciales razonables, la que posibilita impedir las

prácticas del titular de la patente contrarias a la competencia, en especial la retención de stocks y la fijación de precios excesivos, la figura de las patentes dependientes, según la cual el otorgamiento de una patente no creará una exclusividad tal que impida crear un nuevo producto o procedimiento a partir de la idea o invención patentada en la primera patente.

Cabe un párrafo aparte para la licencia obligatoria fundada en motivos de emergencia sanitaria y seguridad nacional, a través de la cual se reafirma que dos de los principales objetivos del proyecto han sido la protección de la salud de la población y la preservación del principio de la soberanía nacional.

En otro orden de cosas, y si bien ello ha sido debidamente aclarado por el señor miembro informante, no quiero dejar de destacar que todos esos mecanismos, y otros como la fijación de un período de transición para la aplicación de los derechos emanados del patentamiento, o las excepciones previstas por el artículo 44 en caso de productos nuevos que ofrezcan avances significativos para proteger la salud y nutrición de la población o para promover el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país, se ha protegido a la industria nacional, se ha posibilitado que el trabajo nacional sea empleado en la fabricación de productos patentados y se ha preservado para el país la dirección de sus políticas sanitaria, industrial y tecnológica.

Para terminar, repetimos que creemos, en base a lo que se demuestra en las consideraciones y explicaciones que se han efectuado en las expresiones del señor miembro informante y en el del que habla como presidente de la Comisión de Comercio, que el Congreso de la Nación puede estar seguro, con todo derecho, que todos estos años de tarea legislativa en pro de un nuevo régimen de patentes han dado el fruto de una propuesta razonable, equilibrada, armonizadora en el máximo nivel posible de los intereses en juego, y que aboga eficazmente por el interés nacional en esta materia, puntualmente precisado y determinado en el marco de los cambios y transformaciones que en los últimos tiempos ha experimentado no sólo la materia técnico-legal del derecho de patentes sino también el contexto nacional e internacional en que esa materia se desenvuelve.

Por todo ello solicitamos de esta Honorable Cámara que convierta en ley el proyecto en discusión, que ha tenido sanción del Honorable Senado por voto unánime en general de todos los bloques políticos allí representados.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FOLLONI

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre régimen de patentes y de modelos de utilidad

Con el acta final, suscrita el 15 de diciembre de 1993 en Ginebra por 116 países, incluidos la Argentina y los Estados Unidos, se cerraron siete años de arduas negociaciones en la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Mediante el citado convenio se dispuso, por parte de los países signatarios, el reconocimiento del derecho de propiedad intelectual. Nuestro país, al rubricar ese documento, no hizo más que cambiar con la normativa constitucional (artículo 17), que concede a todo autor o inventor la propiedad de su obra, invento o descubrimiento. En la actualidad nadie pone en tela de

juicio la aceptación del derecho de propiedad intelectual.

El acuerdo de marras, luego de consagrar tal principio establece (artículo 8, inciso a) que una patente conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente. De esta forma se recepta el denominado monopolio de explotación, que atribuye al inventor la exclusividad de la elaboración o comercialización del producto. Sabido es que el monopolio lo que persigue es eliminar competidores e imponer precios elevados en perjuicio de los consumidores. En consecuencia, el acuerdo considerado configura, por un lado, un avance en cuanto supone el reconocimiento de la propiedad intelectual pero, por el otro, merece nuestra objeción al legalizar la explotación monopolística.

El gobierno de los Estados Unidos apata liderando la posición monopolista, en especial respecto de las fórmulas medicinales. Para estas últimas, el reconocimiento del monopolio es particularmente grave ya que está en juego la vida humana. Ello es así, porque vastos sectores de escasos recursos podrían verse imposibilitados de acceder a medicamentos indispensables debido a los precios abusivos que seguramente, según la experiencia aquilatada en la misma Norteamérica, impondrían los fabricantes de los diversos productos farmacéuticos.

Pero, sin perjuicio de haber receptado la explotación monopolística, el comentado acuerdo del GATT —organismo que se ha convertido en la Organización Mundial de Comercio (OMC)— comienza reafirmando el objetivo de asegurar el libre comercio en el mundo. Así empieza diciendo: "Deseamos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de velar porque las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo...". Obsérvese la insistencia en la defensa del comercio sin restricciones entre los países.

Más adelante (artículos 30 y 31) se prescriben excepciones al derecho otorgado al titular de la patente para fabricar o vender en forma monopolística. Así se contempla un sistema amplio de licencias a favor de terceros para su explotación del producto.

Ello puede ocurrir cuando:

1. Se ha intentado obtener autorización del titular de los derechos en condiciones razonables y éste se ha negado a concederla.
2. Se da una situación de gravedad y urgencia y sea necesario abastecer el mercado interno.
3. Se persiga el uso público no comercial.
4. Se procura poner fin a prácticas anticompetitivas.

Pero en el acuerdo se va más lejos aún. Así, se excluyen de la patentabilidad —o lo que es lo mismo, del derecho de propiedad intelectual— las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse para

proteger el orden público o la moralidad, e inclusive para preservar la salud o la vida de las personas (artículo 27, apéndice 2).

En consecuencia, el convenio que nos ocupa parece haber receptado el monopolio con un sentimiento de culpa. Es como si dijera "perdón por haber reconocido legalmente el monopolio".

Respecto del cumplimiento del acuerdo del GATT —ahora OMC— cabe señalar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado" (artículo 27). La Argentina y Norteamérica han suscrito tal Convención. Por el lado argentino, la Corte de Suprema de Justicia de la Nación ha convalidado recientemente (Fibraa Constructora SCA c/Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, 7 de julio de 1993) la vigencia de la norma aludida de la Convención de Viena.

Por consiguiente, los instrumentos internacionales mencionados obligan a la Argentina a admitir el reconocimiento de la propiedad intelectual para las fórmulas farmacéuticas, para lo cual deberá modificar la antigua ley 111. Esta modificación cuenta con el consenso generalizado, incluido el de los laboratorios farmacéuticos nacionales. Pero también los citados acuerdos comprometen a EE. UU., que a tenor de ellos tendrá que flexibilizar su rígida postura monopolista. En cuanto a la actitud de Norteamérica, que ejerció fuerte presión sobre diversos países —entre ellos el nuestro— para lograr el reconocimiento de un monopolio pleno, cabe recordar lo dispuesto en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados aprobada por las Naciones Unidas en 1974. Esta Carta repudia el empleo de medios para coaccionar a otro Estado con la finalidad de obtener de él subordinación o ventajas de cualquier naturaleza (artículo 32). En un mundo cada vez más interdependiente, donde todos necesitan de todos, es recomendable el trato respetuoso entre las naciones.

Hechas estas reflexiones generales sobre el acuerdo del GATT, corresponde considerar el proyecto aprobado por el Senado de la Nación, que ha venido en revisión a esta Cámara de Diputados.

Al respecto importa destacar que, en particular, los artículos 44, 45 y 47 recogen, en su sustancia, las excepciones al monopolio de explotación establecidas en el artículo 31 del Acta del GATT que se mencionó precedentemente.

Que, de esta manera, el pronunciamiento del Senado satisface esencialmente nuestra postura personal plasmada en un proyecto de ley sobre patentes presentado oportunamente para su tratamiento por esta Honorable Cámara.

Si bien en nuestra iniciativa se adoptaba una posición rigidamente antimonopolista en materia de productos medicinales, las excepciones a la explotación monopolística de las fórmulas farmacéuticas admitidas por el GATT, que fueron receptadas por el Senado, atenúan sensiblemente la modalidad monopolística haciendo posible la superación de nuestra postura en aras de una conciliación de criterios.

Además, el proyecto que se está considerando, al exigir que el titular de la patente explote, por sí o por terceros, la invención mediante su ejecución en el territorio de la República Argentina, aclarando que la explotación comprende la producción, distribución y comercialización (artículo 42), está indicando indudablemente que la mera importación no sustituye a la elaboración del producto. De esta forma también se satisface nuestra definición sobre el punto, pues para nosotros no es asimilable la importación a la producción. Igualmente expresamos la conformidad con la recepción de las patentes dependientes (artículo 49), que también figuraba en nuestro proyecto.

En suma, el reconocimiento de la propiedad intelectual de las invenciones —incluidas las medicinales—

constituye una demanda de los sectores involucrados, que cuenta con la aceptación generalizada. Ante ello urge modificar la antigua ley vigente, número 111, que no acepta la propiedad intelectual de las fórmulas farmacéuticas. Además, se trata de un tema que ha sido ampliamente debatido, habiéndose escuchado en el seno de esta Cámara las posturas de los diferentes sectores interesados en la cuestión.

De allí que ha llegado el momento de dotar a la sociedad de un nuevo instrumento que recoja las nuevas tendencias y los atendibles reclamos sobre la materia.

Por todas estas razones damos nuestro voto positivo a la medida del Senado sometida a la consideración de esta Honorable Cámara.